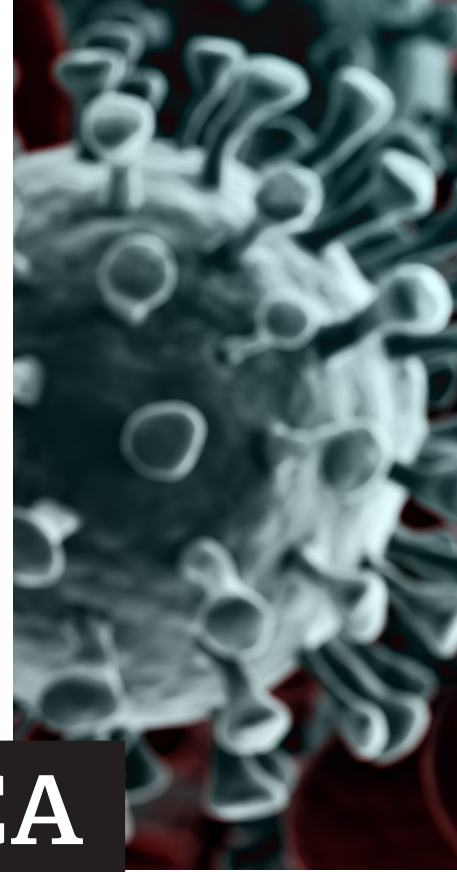




INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

La federación sindical internacional de trabajadorxs de servicios públicos

ESPAÑOL



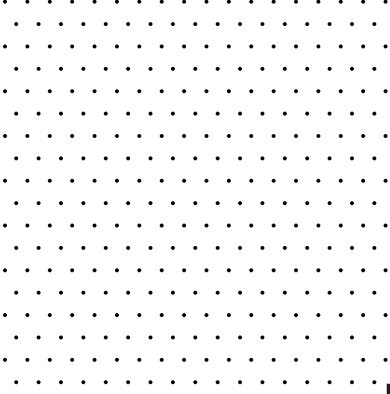
SERVICIOS DE

VIVIENDA PÚBLICA

Y SOCIAL EFICACES

**Un recurso fundamental para detener
las pandemias mundiales**





Servicios de vivienda pública y social eficaces

UN RECURSO FUNDAMENTAL PARA DETENER LAS PANDEMIAS MUNDIALES

by Daria Cibrario

A más de 3.900 millones de personas¹ - la mitad de la población mundial - se les ordenó confinarse en abril de 2020 para detener la propagación del Covid-19. Pero, ¿cómo pueden las órdenes de confinamiento detener de manera realista el contagio cuando más de 1.800 millones de personas en todo el mundo carecen de una vivienda adecuada, más de mil millones viven en asentamientos informales, 150 millones no tienen hogar y millones más sufren de inseguridad de tenencia²?

La epidemia de Covid-19 ha establecido un nuevo nivel de interdependencia que atraviesa la condición social y conecta la salud y el bienestar de todxs nosotrxs, ya que la imposibilidad de algunxs de entrar en aislamiento puede resultar en la contaminación y la muerte de otrxs. Al magnificar la vulnerabilidad y golpear con más fuerza a lxs miembros más frágiles de la sociedad, la pandemia ha expuesto plenamente los estragos causados por la desigualdad social, de la cual la crisis mundial de la vivienda es un componente importante.

La falta de acceso a una vivienda asequible y decente, los desalojos forzosos y la inseguridad de la tenencia son una realidad cotidiana para millones de trabajadorxs pobres, trabajadorxs del sector informal, habitantes de barrios marginales y personas sin hogar. Esto suele ir acompañado de la falta de acceso a servicios públicos esenciales, como el agua, el saneamiento y la electricidad, lo que proporciona las condiciones perfectas para que el virus se propague³. La tragedia de lxs migrantes y refugiadxs, detenedxs en condiciones lamentables en campamentos y centros de detención congestionados, se suma a este fracaso sistémico y a la violación de los derechos humanos⁴ exacerbando las tensiones con las comunidades locales⁵.



Niños en un tugurio de la India, © Shutterstock, 2020

LA CRISIS MUNDIAL DE LA VIVIENDA: UNA TRAGEDIA PARA LXS TRABAJADORXS

El Covid-19 está causando dificultades económicas y pérdidas de ingresos masivas a millones de personas, golpeando con más fuerza a lxs más vulnerables al llevar a situación de desempleo y pobreza a lxs trabajadorxs pobres, informales y migrantes, a los habitantes de barrios marginales y a las personas sin hogar. Esta situación es especialmente desesperada para las 5.200 millones de personas (el 71% de la población mundial) con una cobertura de protección social inadecuada o inexistente⁶. Si no se adoptan medidas rápidas y extraordinarias para apoyar los ingresos y mitigar el impacto social de la crisis, muchas más personas serán desalojadas o desposeídas al no poder pagar sus alquileres e hipotecas. Es sorprendente que algunxs estén perdiendo su alojamiento debido al estigma asociado a haber estado enfermxs con el virus o porque trabajan en servicios públicos de primera línea, como el personal médico y de enfermería, por ejemplo⁷.

Mucho antes del Covid-19, la falta de viviendas asequibles y alquileres ya había empujado a gran mayoría de lxs trabajadorxs al borde o fuera de sus ciudades, entre ellxs trabajadorxs de servicios esenciales como la atención de la salud, los servicios sociales y el cuidado de las personas de avanzada edad, los residuos, el transporte público y la educación-, ahora celebradx como “héroes y heroínas”.

Estxs trabajadorxs tienen que soportar ahora largos desplazamientos y a menudo viven en condiciones precarias con escaso acceso a los mismos servicios que prestan a quienes pueden permitirse vivir en zonas más prósperas⁸. Si bien la desigualdad en materia de vivienda ha sido durante mucho tiempo una dura realidad para millones de personas en los países emergentes, ahora también es cada vez más común en los países de altos ingresos, incluso en aquellos donde antes existían los servicios y la disponibilidad de vivienda pública y social.

Los datos son reveladores: en 52 países de un total de 102, lxs trabajadorxs con un salario medio deben ahorrar la totalidad de sus ingresos durante 10 años para poder comprar una vivienda en el país donde viven⁹. En Canadá, los precios de los bienes inmuebles en el área del Gran Toronto han aumentado en un 425 por ciento en los últimos 30 años, mientras que los salarios medios de los hogares han aumentado sólo en un 133 por ciento¹⁰. En Australia, 28.600 trabajadorxs a tiempo completo no tenían hogar en 2018, lo que representa el 16,5% del total de la población sin hogar del país¹¹. Estos datos muestran que el trabajo permanente a tiempo completo no es una garantía de acceso a una vivienda asequible y adecuada.

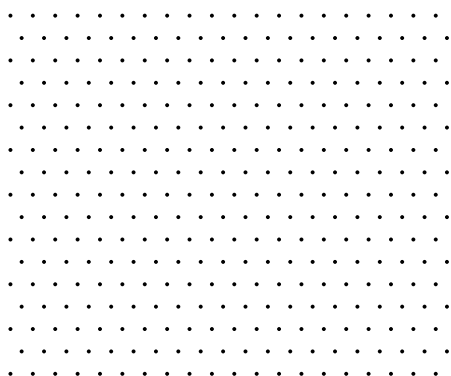


© Shutterstock, 2020

LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIVIENDA PÚBLICA Y SOCIAL HA FRACASADO

La vivienda está consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos como algo esencial para el derecho a un nivel de vida y bienestar adecuados¹². También figura como objetivo prioritario en los marcos normativos mundiales, incluidos los objetivos de desarrollo sostenible¹³, la Carta de Ginebra de Naciones Unidas sobre vivienda sostenible de 2015 para “garantizar a todos el acceso a una vivienda digna, adecuada, accesible y salubre¹⁴”, y en la Nueva Agenda Urbana¹⁵. Para la ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda, Leilani Farha, “la vivienda es un derecho humano y una necesidad humana primaria, no una mercancía¹⁶”. Los Estados se han comprometido a defender este derecho y son responsables de su aplicación. Sin embargo, muchos gobiernos han pasado por alto sus responsabilidades en materia de vivienda durante decenios y han recurrido en cambio a promotores privados, inversores inmobiliarios, ayuda extranjera y organizaciones de beneficencia para proporcionar soluciones de vivienda muy necesarias.

En los últimos decenios, la vivienda se ha financiado y es uno de los objetivos favoritos de los grandes inversores privados y empresariales, los bancos, el capital privado y los fondos de pensiones. Estos actores la han utilizado como un activo para invertir el capital



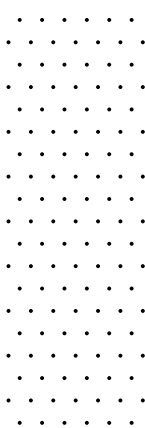


o buscar nuevas salidas de beneficios, ya que los márgenes de la inversión tradicional en producción y servicios han disminuido y los tipos de interés bancarios se han estancado. La inversión inmobiliaria también se ha convertido en una de las vías favoritas para el blanqueo de dinero. Se trata de un plan triangular por el cual la delincuencia organizada vende apartamentos, edificios, hoteles y restaurantes legalmente adquiridos a sus propias empresas extraterritoriales a precios inflados, de esta manera maximizan las cantidades de dinero blanqueado¹⁷. Un reciente estudio de la Unión Europea titulado “¿Quién es el dueño de la ciudad?” muestra el efecto negativo directo de la financiación del mercado de la vivienda urbana sobre la asequibilidad¹⁸.

En 2016, el valor global de los bienes inmuebles residenciales estaba valorado en 163 billones de dólares, más de la mitad del valor de todos los activos globales y más del doble del PBI total del mundo¹⁹. Esta tendencia generó que los precios de la tierra y de la vivienda se disparen, haciendo que las ciudades sean inasequibles. Esta situación empujó a sus habitantes y trabajadorxs a las afueras o a expulsarlos de las ciudades, dejando así a lxs más vulnerables en las calles, al mismo tiempo que la falta de vivienda ha sido criminalizada en muchos lugares²⁰. El auge del turismo de masas y la popularización de las plataformas virtuales de alquiler a corto plazo han exacerbado este fenómeno.

Por el contrario, la inversión pública en el sector sigue disminuyendo. Sólo en la UE, la brecha de inversión en vivienda social se sitúa en 57.000 millones de euros al año²¹. Donde existían, los servicios de vivienda pública y social se han reducido o finalizado. Los gobiernos que han adoptado políticas neoliberales han fomentado la desregulación del mercado de la vivienda y la venta de viviendas públicas y de terrenos de los gobiernos locales promoviendo - y en algunos casos subvencionando - su compra privada mediante exenciones fiscales y préstamos a bajo interés. El fracaso generalizado en la lucha contra la especulación inmobiliaria a nivel nacional y mundial ha dado lugar a que la venta de existencias de viviendas dé lugar a un mayor aburguesamiento urbano, a la segregación social y a la desigualdad en muchas ciudades y zonas metropolitanas de todo el mundo. Tras la crisis financiera de 2008, Madrid vendió más de 1.800 viviendas sociales a la empresa de capital privado Blackstone por 128,5 millones de euros. A partir de 2018, el valor de esos mismos apartamentos había aumentado en un 227 por ciento²².

Aunque los marcos jurídicos que sustentan las políticas de vivienda y la asignación de recursos suelen establecerse a nivel nacional, a menudo son los gobiernos locales y regionales los que se encargan de la aplicación del desarrollo local de la vivienda y de la gestión de las existencias de viviendas públicas y sociales y los servicios conexos. A medida que se aceleran las tendencias mundiales de urbanización, el aumento de la desigualdad y los desplazamientos en masa debido a la guerra, la migración y la crisis climática, el papel de los gobiernos locales en las políticas de vivienda es más importante que nunca. Sin embargo, sus recursos, facultades y capacidades institucionales suelen ser insuficientes para frenar eficazmente la especulación inmobiliaria y defender el derecho a la vivienda en sus territorios.



La Défense, Paris,
© Shutterstock, 2020

ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO LOCAL PARA PROPORCIONAR ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19

La convergencia de las crisis mundiales de la vivienda y de la pandemia mundial ha hecho que los gobiernos locales se enfrenten a grandes dificultades para acomodar adecuadamente a las personas durante la cuarentena. Por lo tanto, han buscado medidas de emergencia, y han establecido nuevos servicios, para permitir un confinamiento adecuado y contener la propagación del virus en sus comunidades.

Las medidas de emergencia adoptadas por las ciudades incluyen:

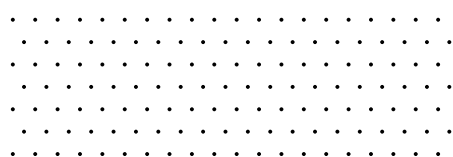
- La creación de refugios temporales en edificios públicos (cuarteles del ejército, infraestructuras deportivas, centros sociales de barrio, edificios públicos vacíos, universidades, ayuntamientos, etc.);
- Solicitar o alquilar habitaciones de hotel privadas a precios preferenciales para permitir el autoaislamiento;
- Crear equipos móviles multidisciplinarios de servicio público integrados por trabajadorxs de la salud, sociales y de seguridad para realizar pruebas, proporcionar tratamiento y atender directamente in situ a las personas vulnerables;
- Reforzar la disponibilidad de refugios y el apoyo a las víctimas de la violencia doméstica, cuyos casos se han incrementado a raíz de las órdenes de confinamiento²³;
- Proporcionar “puntos de saneamiento” con agua corriente y jabón en diferentes lugares de la ciudad para facilitar el acceso a un lavado de manos

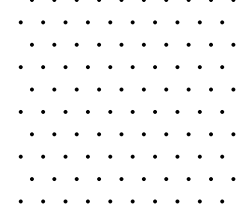
adecuado, especialmente cuando esos servicios esenciales son de difícil acceso o inseguros.

Las ciudades también han tratado de mitigar los efectos de la crisis en los ingresos de lxs inquilinxs precarixs:

- Reducir, aplazar o renunciar a los pagos de los alquileres de las viviendas públicas y sociales para lxs inquilinos que han sufrido una pérdida de ingresos;
- Aprobando moratorias en los desalojos y embargos;
- Negociar con las agencias inmobiliarias, lxs propietarixs y los bancos para alentarlos a aplazar los alquileres y los pagos de lxs inquilinxs residenciales y comerciales vulnerables;
- Aplazando los impuestos municipales y otros impuestos locales;
- Obligar a continuar los servicios esenciales (electricidad, agua, gas, etc.), incluso en caso de impago por parte de los hogares que sufren dificultades económicas²⁴.

Si bien estas medidas van en la dirección correcta para enfrentar la pandemia, es vital encontrar soluciones estables a la crisis mundial de la vivienda. Para ello, los gobiernos centrales deben apoyar los esfuerzos de los gobiernos locales mediante transferencias intergubernamentales estables y una coordinación política eficaz. Al mismo tiempo, las instituciones internacionales deben tener debidamente en cuenta las necesidades de los gobiernos locales en lo que respecta a las soluciones de vivienda pública y social en sus planes de rescate.





LOS SINDICATOS PRESIONAN PARA QUE SE FORTALEZCA LA VIVIENDA PÚBLICA Y SOCIAL

Los sindicatos de la administración pública suelen representar a lxs trabajadorxs de los servicios de vivienda pública y social y tienen una comprensión experta de las cuestiones de vivienda en las comunidades locales. Tras la pandemia, exigen que todos los niveles de gobierno adopten medidas ambiciosas y duraderas para garantizar que lxs trabajadorxs con salarios bajos, las personas sin hogar y las personas vulnerables estén debidamente protegidxs y puedan, cuando sea necesario, acceder a servicios de apoyo, prestados por personal de nivel adecuado y en condiciones decentes²⁵. También exigen que lxs trabajadorxs que pierden sus ingresos no pierdan también un techo, poniendo así en peligro su vida y la de los demás. Estas demandas se suman a las acciones y campañas sindicales de larga duración, que ya existían mucho antes del Covid-19, en favor del fortalecimiento de los servicios de vivienda pública y social.

En el **Reino Unido**, el acceso a una vivienda decente, segura y asequible es un gran desafío. Los consejos locales de Inglaterra tienen 1,15 millones de personas en listas de espera para viviendas sociales²⁶. En enero de 2020, el sindicato de servicios públicos UNISON lanzó el “Manifiesto sobre la Vivienda”²⁷, una estrategia integral para defender el derecho a la vivienda para todxs, que hace un llamamiento al gobierno del Reino Unido a:

- Restablecer la inversión directa en viviendas públicas mediante subvenciones de capital iniciales;
- Exigir que las nuevas viviendas sociales de alquiler cumplan las normas más estrictas en materia de medio ambiente, construcción, seguridad, espacio, eficiencia energética y accesibilidad;
- Proporcionar a los ayuntamientos una certidumbre de financiación a largo plazo y permitirles retener el 100 por ciento de los ingresos de capital para invertir en viviendas;
- Asegurar que el ayuntamiento y el servicio de viviendas sociales de alquiler cuenten con la financiación y los recursos adecuados.

En el contexto de Covid-19, UNISON, junto con los defensores de la vivienda, incluida la Campaña de Hogares para Todos²⁸, insta al Gobierno del Reino Unido a que adopte medidas más firmes para garantizar que nadie se quede en la calle sin hogar o pierda un techo debido a la pandemia. El sindicato pide al Gobierno del Reino Unido que proteja a lxs inquilinxs y a los hogares mediante las siguientes acciones:

- Suspensión de todos los desalojos mientras dure la pandemia;

- Suspensión de las demandas de alquiler de lxs inquilinxs con dificultades, con medidas similares a las previstas para lxs propietarixs con dificultades;
- Proporcionando a los consejos una financiación adecuada para albergar a los vulnerables durante y después de la pandemia;
- Mejorando el apoyo al bienestar de lxs arrendatarixs aumentando las prestaciones de vivienda para cubrir los alquileres medios en las zonas locales;
- Desechando las penalizaciones por habitación libre y el límite de dos hijos en las prestaciones de vivienda;
- Proporcionando financiación en forma de subvenciones a largo plazo para que los consejos puedan construir 150.000 viviendas sociales de alquiler al año para los hogares vulnerables y de bajos ingresos²⁹.

El Covid-19 también ha vuelto a poner de relieve los problemas de seguridad contra incendios, ya que miles de personas en el Reino Unido todavía viven en casas que están lejos de ser a prueba de incendios y han tenido que confirmarse allí. La seguridad contra incendios ha pasado a un primer plano en el debate público sobre la vivienda desde el terrible incendio de Grenfell en Londres en 2017, que causó 72 muertes, la mayoría de ellas entre trabajadorxs migrantes mal pagadxs³⁰. A pesar de ello, muchxs sobrevivientes de la torre de Grenfell aún no han sido realojadxs³¹.

Australia es otro país en el que los servicios públicos y de vivienda social han sido eliminados a pesar de ser muy necesarios. En 2017, 420.000 hogares australianos vivían en viviendas públicas y comunitarias y más de 200.000 más estaban en listas de espera³². El Sindicato de Servicios Australianos (ASU) ha hecho campaña para detener el desfinanciamiento de la vivienda pública en Australia, pero con el Partido Liberal en el poder desde 2018, los recortes han continuado. La Unión de Construcción, Silvicultura, Minería y Energía (CFMEU) se negó a trabajar en la demolición del edificio Sirius³³ -uno de los últimos complejos de viviendas públicas de Sidney- y el terreno fue vendido por el gobierno estatal³⁴ a un promotor privado.

Durante el pico de la pandemia, **Francia** estaba bajo estricto confinamiento y, sin embargo, cada noche el país contaba con aproximadamente 22.000 personas que dormían a la intemperie en las calles³⁵. Diez millones de personas viven en viviendas sociales, alojadas en 4,5 millones de unidades de vivienda social que en realidad generan más ingresos (74,4 mil millones de euros) de lo que cuesta mantenerlas (41,7 mil millones de euros). A pesar de ello, el gobierno francés inició en 2017 una



© Shutterstock, 2020

profunda reestructuración de sus instituciones de vivienda pública y social, empujándolas hacia un enfoque basado en el mercado.

La “ley Elan”³⁶ de 2018 recorta el presupuesto de los préstamos estatales para viviendas sociales en 3.500 millones de euros en tres años, manteniendo al mismo tiempo las ventajas fiscales para los promotores privados. También obligó a los organismos locales de vivienda social a vender sus activos en el mercado libre con el fin de recaudar fondos para financiar sus servicios. Se trataba de compensar la disminución de las ayudas públicas a la renta de los hogares individuales y de transformar estos organismos de vivienda social en agencias inmobiliarias comerciales encargadas de gestionar el parque de viviendas sociales sobrantes. La ley también ordenó que las oficinas de vivienda social de los gobiernos locales se fusionaran, haciéndolas menos accesibles a los inquilinos y a los consejos locales, que es donde se toman las decisiones locales sobre la vivienda social. Por último, elevó el umbral de ingresos de las familias para la vivienda social con miras a limitarlo únicamente a las familias con ingresos muy bajos.

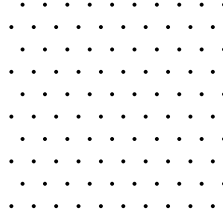
Dado que los empleos precarios y las bajas pensiones de jubilación son cada vez más frecuentes entre la población francesa, el sindicato de Servicios Públicos de la CGT está en contra de la mercantilización de las políticas francesas de vivienda pública y hace hincapié en el papel clave que la vivienda pública puede desempeñar en la lucha contra la pobreza energética y el cambio climático. El sindicato exige una gran inversión pública y una reactivación de la vivienda social y pública a través de las siguientes medidas:

- Detener la venta y la privatización de las viviendas públicas y sociales;
- Invertir masivamente en la ampliación de la oferta de viviendas públicas y sociales y en la renovación de

las existentes de forma que se ahorre energía y se respete el clima;

- Regular el mercado inmobiliario a nivel nacional y local para garantizar alquileres y precios asequibles en todos los ámbitos, rompiendo la segregación social y territorial y asegurando una mezcla social equilibrada mediante el control de los precios en las zonas urbanas críticas (París, Lyon, Marsella, etc.);
- Reducir al 20% la proporción del presupuesto familiar medio que se destina a la vivienda y hacer que la vivienda social sea accesible a los diferentes grupos;
- Reducir la especulación inmobiliaria en los centros urbanos mediante políticas urbanas progresivas que introduzcan una mezcla funcional (vivienda, empleo, servicios públicos, espacios verdes, etc.) en cada barrio;
- Detener el uso de suelos artificiales, que agravan la pérdida de biodiversidad³⁷.

Se estima que en **Canadá** existen 235.000 personas sin hogar³⁸. El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) viene exigiendo desde hace tiempo una estrategia nacional de vivienda eficaz que defienda plenamente la vivienda como derecho humano, ponga fin a la falta de vivienda para 2030 y regule el mercado de la vivienda privada. Las municipalidades y provincias canadienses carecen de fondos para mejorar y mantener un parque de viviendas envejecido. La posición de la CUPE es que el gobierno federal debe proporcionar fondos públicos sustanciales y tierras para mejorar el parque de viviendas sociales. Se necesita un esfuerzo coordinado en todos los niveles de gobierno y en todos los municipios para frenar la especulación en el mercado inmobiliario, que ha hecho que la vida en las ciudades sea inasequible para la mayoría de los hogares de trabajadorxs canadienses³⁹.



LA VIVIENDA POR ENCIMA DEL LUCRO: RECUPERAR Y (RE)CONSTRUIR UN SERVICIO DE VIVIENDA PÚBLICA Y SOCIAL EFICAZ PARA TODXS

A medida que las ciudades se ven obligadas a elaborar nuevas medidas y adaptar las políticas para hacer frente al Covid-19, la vivienda pública y social se perfila claramente como una parte esencial de la solución para vencer las pandemias y proteger la salud pública a medio y largo plazo. Si bien la promoción de políticas de vivienda impulsadas por el mercado sigue siendo generalizada a nivel mundial, algunos gobiernos locales están uniendo fuerzas para nadar contra la corriente y están demostrando que las alternativas funcionan.

Ante el aumento del 100% de los precios de los alquileres desde 2015, el gobierno local de Berlín ha congelado los precios de los alquileres en los niveles de junio de 2019 durante cinco años y ha recomprado 670 apartamentos que iban a ser vendidos al holding inmobiliario Deutsche Wohnen. Esta medida evitó a lxs inquilinxs aumentos desproporcionados de alquiler debido a las renovaciones superfluas impuestas por la empresa⁴⁰. A finales de 2019, la Asociación de la Vivienda de Berlín remunicipalizó 6.000 apartamentos en los distritos de Spandau y Reinickendorf⁴¹.

Este enfoque tiene sentido si se considera Viena, una de las ciudades que encabeza el ranking mundial de calidad de vida, y donde el 62 por ciento de lxs residentes de la ciudad viven en viviendas de propiedad pública o subvencionadas. Sorprendentemente, estxs residentes no son sólo los que tienen ingresos más bajos, ya que la vivienda en Viena se considera un bien social, no un producto de mercado⁴², y la proporción general de viviendas sociales de la ciudad (46 por ciento) está entre las más altas de la UE⁴³.

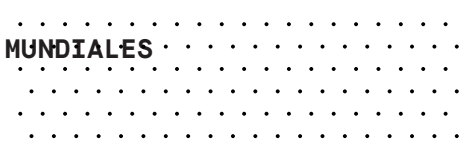
En el plano europeo, una coalición europea de la sociedad civil compuesta por asociaciones de inquilinxs, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, estudiantes, pensionistas y representantes de la red de ciudades, puso en marcha la iniciativa “Vivienda para todos⁴⁴” en marzo de 2019, exigiendo que la Unión Europea tomara medidas para garantizar una vivienda asequible para todos. Aunque los organizadores la detuvieron en febrero de 2020 a causa de Brexit y antes de que se alcanzara el objetivo de un millón de firmas, la iniciativa ha dado lugar a una iniciativa parlamentaria de la UE sobre “el acceso a una vivienda digna y asequible para todos”. En el informe posterior redactado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la UE se pide ahora a la Comisión de la UE que “desarrolle una estrategia integrada para la vivienda social, pública y asequible” y a los Estados miembros que aumenten la inversión pública sostenible para garantizar una vivienda segura, de calidad, y asequible para todxs en la UE⁴⁵.

Las ciudades también se están uniendo para devolver a la vivienda su función social primaria. En julio de 2019, ocho ciudades⁴⁶, junto con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), lanzaron “Ciudades por una vivienda adecuada⁴⁷”, un llamamiento mundial a los gobiernos nacionales y a las instituciones mundiales para que tengan más facultades reglamentarias y fiscales, así como recursos para que los gobiernos locales controlen y mejoren sus existencias de viviendas públicas. Este llamamiento forma parte de una serie de medidas en apoyo de la campaña “The Shift”, lanzada por la ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada para reclamar la vivienda como derecho humano fundamental⁴⁸. Hasta la fecha, 42 ciudades y zonas metropolitanas han respaldado “Ciudades por una vivienda adecuada⁴⁹”.

Publicadas en diciembre de 2019 por el anterior Relator Especial de las Naciones Unidas, las “Directrices para la aplicación del derecho a una vivienda adecuada” contienen una posición clara sobre “la prevención de toda privatización de la vivienda pública o social que reduzca la capacidad del Estado para garantizar el derecho a una vivienda adecuada⁵⁰”. Cuando el Covid-19 resurgió en Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona ha escrito a 14 empresas propietarias de 194 apartamentos vacíos instándoles a encontrar inquilinxs en el plazo de un mes o la ciudad los expropiará, compensando a lxs propietarixs a la mitad del precio de mercado⁵¹.

A medida que las autoridades públicas tratan de proporcionar medidas de confinamiento y seguridad para vencer al Covid-19, y se ven obligadas a replantearse y adaptar sus políticas, la vivienda pública y social surge claramente como parte esencial de la solución para vencer las pandemias y proteger la salud pública. Las soluciones basadas en el mercado han demostrado ser inadecuadas para resolver eficazmente la crisis mundial de la vivienda y defender el derecho humano a la vivienda, dejando una profunda desigualdad social y desgarrando la cohesión social en muchas comunidades locales, ya que lxs más vulnerables son lxs que pagan el precio más alto.

Es imperativo que las lecciones aprendidas de la pandemia se integren, se hagan permanentes y se amplíen para garantizar soluciones de vivienda duraderas y adecuadas para todxs. Los servicios de vivienda pública y social tienen un papel fundamental que desempeñar para que esto sea posible, y deben ser plenamente reclamados y restaurados como parte fundamental del conjunto de instrumentos de que disponen los gobiernos a todos los niveles para garantizar la seguridad social y la salud pública para todxs.



© Internacional de Servicios Públicos, Abril de 2020, revisado y publicado en Septiembre de 2020

© Ilustración de la portada colección Shutterstock

SOBRE LA AUTORA

Daria Cibrario es responsable de políticas en la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y tiene a su cargo el sector de los gobiernos locales y regionales y de las empresas multinacionales. Anteriormente, Daria ocupó la función de Secretaria Política del sector de Alimentación y Bebidas en la Federación Europea de Sindicatos en los sectores de la Alimentación, la Agricultura y el Turismo en Bruselas y de Responsable Internacional del sector de alimentación y bebidas en la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación en Ginebra. Tiene un Máster en Políticas de la Economía Mundial de la Escuela de Economía de Londres.

1. A. Stanford, "[Coronavirus: Half of humanity now on lockdown as 90 countries call for confinement](#)" Euronews, 3 April 2020
2. UN General Assembly, "[Guidelines for the Implementation of the Right to Adequate Housing](#)", Report of the Special Rapporteur on Adequate Housing, A/HRC/43/43, 26 December 2019
3. Fèvre, E. and Tacoli, C. "[Coronavirus threat looms large for low-income cities](#)" IIED 26 February 2020 and Tsai, J. and Wilson, M. "[COVID-19: a potential public health problem for homeless populations](#)" The Lancet, Vol 5 April 2020
4. UN, "['Everyone at risk' as coronavirus cases tick up among migrants and refugees sheltering in Greece](#)" 2 April 2020
5. A. Anam, "[COVID-19 fuels tensions between Rohingya refugees and Bangladeshi hosts](#)", The New Humanitarian, 27 July 2020
6. ILO, "[World Social Protection Report 2017-19](#)", Geneva 2017
7. Sharma N., "[Stigma: the other enemy India's over-worked doctors face in the battle against COVID-19](#)" 25 March 2020 and Nouvel Observateur, "[«Merci d'aller vivre ailleurs » : des soignants considérés comme des pestiférés par leurs voisins](#)" 25 March 2020
8. PSI, "[Ten Points for Fair Cities and an Inclusive New Urban Agenda](#)" 2016 and Pavanelli, R. "[After the applause is time to rebuild global public services](#)", The Guardian 23 June 2020
9. Gertten, F. "[The Push](#)" documentary, Sweden 2019 official trailer
10. Ibid.
11. ACTU, "[Nearly thirty thousand working full-time but homeless](#)" 25 July 2018
12. Art. 25, [Universal Declaration of Human Rights](#), UN, 10 December 1948
13. SDG 11, Target 11.1 "[By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and basic services and upgrade slums](#)"
14. UNECE, "[The Geneva UN Charter on Sustainable Housing Ensure access to decent, adequate, affordable and healthy housing for all](#)", 16 April 2016
15. [The New Urban Agenda](#), Habitat III, Quito, 2016
16. <http://unhousingrapp.org/>
17. Reference to Saviano, R. in Wainwright. O., "[Push review – a whirlwind tour of rocketing rents and personal tragedy](#)" The Guardian, 10 September 2020
18. Van Heerden S., Ribeiro Barranco R., Lavalle C., "[Who owns the city? Exploratory research activity on the financialisation of housing in EU cities](#)", European Commission, 2020
19. Farha. L. "[Commodification over community: financialization of the housing sector and its threat to](#)

- [SDG 11 and the right to housing](#)” SDG 11, Spotlight on Sustainable Development 2017
20. National Law Centre on Homelessness and Poverty, “[No Safe Place. The Criminalization of Homelessness in U.S. Cities](#)” USA 2019 and Kovács, V. “[The war on rough sleeping. On the Criminalisation of homelessness in Hungary](#)” Eurozine, 12 November 2019
 21. Van Sparrentak K. (Rapporteur), Draft Report on “[Access to decent and affordable housing for all](#)” (2019/2187(INI)) EU Committee on Employment and Social Affairs, 27 July 2020
 22. Farha, L., “[When governments sell out to developers, housing is no longer a human right](#)” The Guardian, 29 February 2020 and Caballero, F. “[La venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitres que condenó al Gobierno de Ana Botella](#)” El Diario 29 December 2018
 23. Taub, A. “[A New COVID-19 Crisis: Domestic Abuse Rises Worldwide](#)” NYT 14 April 2020
 24. UCLG, “[LLE Housing: ensuring everyone can safely #StayAtHome Briefing & Learning Note](#)” April 1st, 2020 and UCLG-Metropolis “[Cities for Global Health](#)” database.
 25. A 2019 UNISON report exposed the harsh conditions of social, elderly and community care workers in the UK. “[Sleeping in, losing out: a survey of care staff on sleep-in shifts](#)” UK 2019
 26. UNISON website, “[The government’s new housing proposals are ‘flawed’, says UNISON](#)”, 13 March 2020
 27. UNISON, “[Housing Manifesto. Safe, Decent and Affordable Homes for All: UNISON’s Vision for Housing](#)” January 2020
 28. Homes for All web page <https://homesforall.org/>
 29. With the contribution of Sylvia Jones, UNISON’s Assistant Policy Officer, 1 May 2020.
 30. Prentis, D, “[Grenfell must not be allowed to be another example of justice denied](#)” UNISON, 12 June 2020
 31. Booth, R. “[Grenfell survivors and bereaved still fighting frustrating battles](#)” The Guardian, 16 January 2020
 32. ABC News, “[More than 200,000 on public housing waiting list](#)”, 27 January 2009
 33. Mairs, J. « [Unions ban construction workers from demolishing Sydney’s brutalist Sirius building](#)” DeZeen, 21 September 2016
 34. Knaus, C. “[Last resident at Sydney’s Sirius given fond farewell](#)” The Guardian 27 January 2018
 35. Cloris, J. « [Grand froid : près de 200 000 sans abri en France](#) » Le Parisien 1 February 2019
 36. République Française, Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, « [Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique](#) »
 37. CGT Fonction Publique Magazine n. 271 Octobre 2018 and author’s interview with Francis Combrouze, Fédération nationale CGT Services Publics, Equipement-environnement, 6 April 2020.
 38. CUPE, « [Municipalities and affordable housing](#) » 27 May 2019
 39. CUPE “[Housing is a human right](#)” 1 June 2018
 40. Stoyanov, A. “[Berlin continues fight for affordable housing](#)” 5 October 2019
 41. The Future is Public Conference Report, “[Towards democratic ownership of public services](#)”, Working draft Amsterdam, December 2019
 42. Lorin V., « [Can Vienna’s model of social housing provide the inspiration to tackle Europe’s housing crisis?](#)” Equal Times 22 January 2020
 43. Housing Europe, “[Highlights: The state of housing in the EU](#)”, 2019
 44. [Housing for All](#) website
 45. Van Sparrentak K. (Rapporteur), Draft Report on “[Access to decent and affordable housing for all](#)” (2019/2187(INI)) EU Committee on Employment and Social Affairs, 27 July 2020
 46. Amsterdam, Barcelona, Berlin, London, Montevideo, Montreal, New York, Paris
 47. “[Cities for Adequate Housing, Municipalist Declaration of Local Governments for the Right to Housing and the Right to the City](#)”, New York, 16th July 2018
 48. UN Special Rapporteur on the Right to Housing, “[The Shift](#)” website
 49. Amsterdam, Asunción, Bangkok, Barcelona, Barcelona Provincial Council, Beitunia, Berlin, Birmingham, Blantyre, Bologna, Buenos Aires, Cascais, Copenhagen, Durban, Eyyübiye, Geneva, Jakarta, Lisbon, London, Mannheim, Mexico City, Medellín, Montreal, Montevideo, New Taipei, New York, Paris, Rennes, Río Grande, San Antonio de Areco, Seoul, Strasbourg, Taipei, Terrassa, Tlajomulco, Vienna, Zaragoza, Barcelona Metropolitan Area, Greater Manchester, Plaine Commune, Grand Paris. <https://citiesforhousing.org/cities/>
 50. Art. 69 (i), UN General Assembly, A/HRC/43/43 “[Guidelines for the Implementation of the Right to Adequate Housing](#)” 26 December 2019
 51. Sust, T., “[Barcelona amenaza con expropiar 194 pisos vacíos si no se ponen en alquiler](#)”, El Periodico, 13 July 2020



**INTERNACIONAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS**

La federación sindical internacional de trabajadorxs de servicios públicos

45 AVENUE VOLTAIRE, BP 9
01211 FERNEY-VOLTAIRE CEDEX
FRANCIA

TEL: +33 4 50 40 64 64
E-MAIL: PSI@WORLD-PSI.ORG
WWW.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL

La Internacional de Servicios Públicos es una Federación Sindical Internacional que agrupa a más de 700 sindicatos que representan a 30 millones de trabajadorxs en 154 países.

Llevamos sus voces a las Naciones Unidas, la OIT, la OMS y otras organizaciones regionales y mundiales. Defendemos los derechos sindicales y laborales y luchamos por el acceso universal a servicios públicos de calidad.